

Inés Calzada es profesora ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Sociología y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca y doctora en Sociología por esta misma universidad. Máster en Metodología para las Ciencias Sociales por la London School of Economics. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad de Línköping y en la Universidad de Zaragoza. Ha participado en investigaciones nacionales e internacionales sobre el Estado del Bienestar, interesándose especialmente en las actitudes de los ciudadanos hacia las políticas sociales, tema sobre el cual tiene un gran número de publicaciones.

Eloísa del Pino es científica titular del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC). Doctora en C. Política. Ha sido profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Autónoma de Madrid. El último año académico ha sido investigadora visitante en el Latin American Center de la Universidad de Oxford. Su principal área de investigación es la reforma del Estado de Bienestar en perspectiva comparada y sus determinantes políticos, tema sobre el que ha participado y dirigido 12 proyectos de investigación y ha publicado numerosos artículos y libros.

El peso de la opinión pública en las decisiones de ajuste del Estado de Bienestar: el caso de España entre 2008 y 2017

Inés Calzada (UCM) y Eloísa del Pino (IPP-CSIC)¹

1. ¿Ha podido la crisis socavar el apoyo de los españoles al Estado de Bienestar?

Como las autoras de este capítulo ya han mostrado en numerosas ocasiones, los ciudadanos europeos y españoles han manifestado tradicionalmente un fuerte apoyo al Estado de Bienestar, al menos a sus principales políticas sociales (por ejemplo, Calzada y del Pino 2015). Los datos de los que disponíamos antes de la llegada de la crisis reflejan este sólido respaldo al sistema de protección social. La Encuesta Social Europea (ESS) de 2008 revelaba, por ejemplo, que sobre una escala del 0 al 10, donde 0 significa que el Estado no debe intervenir en absoluto en la provisión de distintos servicios relacionados con la sanidad, el desempleo o el cuidado de la infancia, y 10 que estos asuntos deben recaer enteramente en el Estado, en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), la mayoría parte de la ciudadanía se ubicaba entre el 7 y el 9, estando la media de España algo por encima del 8. Asimismo, más de la mitad de la población europea afirmaba estar a favor de que el Estado disminuyera las diferencias de ingresos dentro de su país (ESE 2011).

En concreto en España, antes de los peores años de la crisis, alrededor de un 70% de la población consideraba que "el Estado debía ser el responsable del bienestar de todos los ciudadanos", frente a un 30% que pensaba que "el Estado debería ser responsable únicamente del bienestar de los más desfavorecidos" o que "los propios ciudadanos son los únicos responsables de su bienestar" (CIS). Además, en el periodo previo a la crisis, más de un 90% se oponía al recorte de las principales políticas sociales incluso aunque el gasto había estado aumentando desde 2000. En 2008, poco más de un 10% de los ciudadanos estaba a favor de bajar los impuestos si eso suponía una reducción de los servicios y prestaciones sociales.

Puede por tanto afirmarse que las principales políticas sociales que configuran los Estados de Bienestar contemporáneos gozaban antes de la crisis de un amplio respaldo popular. El grado de apoyo que tengan las políticas sociales es importante ya que cuando este es elevado y mayoritario, los políticos perciben su recorte como una aventura arriesgada (Wenzelburger 2014). De acuerdo con Pierson (2001), la popularidad de estas políticas evitó durante los años 80 y 90 que los recortes fueran más allá de lo deseado por una parte de las elites políticas ya que estas tratan de abstenerse de implementar medidas impopulares si creen que esto les hará perder las elecciones.

Sin embargo, desde que comenzó la segunda fase de la crisis, en España y otros países hemos sido testigos de fuertes recortes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en esta ocasión se han recortado las políticas sociales? ¿Las presiones económicas para el recorte eran demasiado grandes y los gobiernos no han podido evitarlo a pesar de

¹ Queremos agradecer el apoyo a este trabajo del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la financiación del proyecto "La Reestructuración de la Gobernanza del Estado del Bienestar: determinantes políticos e implicaciones sobre la (des)mercantilización de los riesgos (GoWPER)" CSO2017-85598-R.

la oposición ciudadana? o ¿simplemente los ciudadanos han dejado de apoyar el Estado de Bienestar? ¿se muestran ahora más tibios con el Estado de Bienestar que antes de la crisis? o por el contrario, ¿continúan dándole su apoyo? Quizá ¿ha ocurrido como en los años 80 y 90 y los recortes podrían haber ido más allá de lo que lo han hecho sin el apoyo de los ciudadanos al sistema de protección social?

En este capítulo tratamos de responder a tales preguntas. En el apartado siguiente revisamos la literatura científica que se ha preguntado por la evolución de las actitudes ciudadanas hacia el Estado de Bienestar en contextos de crisis, reflexionamos hasta qué punto la opinión pública puede realmente servir de freno a las políticas de ajuste y tratamos de anticipar una respuesta a las preguntas anteriores para el caso de España. En el tercer epígrafe se describe la evolución de las actitudes de los españoles hacia el gasto en las principales políticas sociales durante la crisis, así como las actitudes hacia los impuestos. A continuación, se analizan posibles fisuras hacia el sistema por parte de distintos grupos. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

2. ¿Puede la opinión pública detener los recortes de las políticas sociales en contexto de crisis?

El gasto social nunca había sufrido recortes sustanciales en España antes de la crisis porque los gobiernos conservadores siempre habían temido ser acusados de insensibles con las necesidades sociales y penalizados en las urnas (Guillén y León 2011; Rodríguez-Cabrero 2011). Sin embargo, a partir de 2009 y 2010, las cosas cambiaron. Durante la primera parte de la crisis, el Gobierno Central en manos del PSOE implementó algunas políticas contracíclicas que supusieron un importante incremento del gasto público y, sin embargo, no tuvieron éxito en la contención de la crisis. Estas políticas expansivas y el deterioro de la situación económica provocaron que de un superávit del 2,2% se pasara a un déficit público del 11% en solo tres años. Ello, junto a la presión europea y la necesidad de buscar financiación exterior, hicieron inevitable la aplicación de políticas de ajuste. El propio gobierno socialista primero y luego, con mayor intensidad, el gobierno conservador desde el Ejecutivo central y los gobiernos de estos y otros partidos en los niveles autonómico y local impulsaron recortes que afectaron a todos los sectores de política pública.

De hecho, hay que recordar que el de las políticas sociales no fue el sector que más sufrió durante la crisis. La inversión en infraestructuras fue recortada alrededor de un 54% y la cultura o el deporte sufrieron ajustes del 40%. La política del sector social más afectada por los ajustes fue la educación, con un 19% de recorte, seguida de la sanidad, con un 12% y la protección social, que incluye dependencia, con alrededor de un 10% (FEDEA 2016). A pesar de que las pensiones y la protección por desempleo, se vieron recortadas en varias ocasiones durante la crisis, el gasto en estas políticas aumentó sustantivamente. En pensiones, el gasto creció desde 2008 debido a la generosidad de las correspondientes a algunos nuevos jubilados. En protección por desempleo, el gasto aumentó entre 2008 y 2012, al crecer hasta el 27% de tasa de desempleo, año a partir del cual comenzó reducirse tanto por la disminución del desempleo como debido a los recortes de las prestaciones en ese año y a la pérdida de la protección por algunos desempleados.

Como hemos mostrado arriba, antes de la crisis, los españoles exhibían un apoyo decidido a las políticas sociales. De acuerdo con la literatura en Ciencia

Política que ha estudiado los factores políticos que condicionan el alcance de los recortes en los Estados de Bienestar actuales, en principio, la oposición ciudadana a los recortes debería haber frenado a los políticos, siempre temerosos del castigo electoral, en su intención de ajuste (Pierson 2001). Esta literatura asume que tanto en bonanza como especialmente en crisis, las familias preferirán más esfuerzo público en políticas como la sanidad o la educación para compensar su mayor vulnerabilidad (Taylor Gooby 2011).

Sin embargo, algunos trabajos recientes muestran que en ciertas ocasiones los gobiernos han llegado incluso a poder atribuirse el mérito (*credit claiming*) por los recortes (Giger 2010; Bonoli 2012:106; Vis 2016; Wenzelburger 2014). En situaciones de dificultad económica, es posible que una parte de los ciudadanos sea menos reticente a los recortes al considerar que, en un contexto de crisis, reducir el gasto público sería "un mal menor" que finalmente llevaría a salir de la crisis.

De hecho, Clarke et al. (2013) sobre el Reino Unido o Brooks y Manza para Estados Unidos han mostrado (2013) que en una situación de severa necesidad, la opinión pública puede dividirse y ser más volátil. No cambia en bloque. Unos prefieren recortar el gasto porque quizá perciben que el gobierno se ha excedido con el mismo. Como ya hemos mencionado, en la primera fase de la crisis, muchos gobiernos pusieron en marcha importantes políticas de estímulo económico que significaron un gran incremento del gasto. Gracias a Soroka y Wlezien (2010), sabemos que los ciudadanos reaccionan termostáticamente al gasto. Así que es posible que algunos piensan que, tras un importante incremento, ahora debía reducirse. También es posible que los ciudadanos piensen que sus recursos no se están gestionando razonablemente o simplemente que en época de crisis algunas personas prefieran reservarse parte de sus recursos. En resumen, de acuerdo con la hipótesis de la responsabilidad económica, en las crisis, alguna gente puede creer que es necesario implementar la austeridad en todas las políticas (Ervasti, Goul-Andersen y Hjerm 2013).

Finalmente, la literatura sobre consolidación fiscal muestra que cuando la situación económica es grave y la preferencia de política pública predominante en los organismos internacionales es la austeridad, la capacidad de los gobiernos para resistirse a los ajustes propuestos por aquellas instituciones se reduce severamente (Wagschal y Wenzelburger, 2012; Dellepiane y Hardiman, 2012; Heald y Hood, 2014:14). Según esta literatura, los gobiernos de izquierdas no pueden gobernar conforme a sus preferencias ideológicas que en principio son de mayor gasto público; y ni los de izquierdas ni los derechas pueden mostrar simpatía por los deseos de la población que apoya las políticas de bienestar (parten de la idea de que mucha gente que vota a la derecha también puede querer mantener las políticas sociales en época de crisis) y no tienen más margen que el de tratar de convencer a los ciudadanos de que los recortes son inevitables o de esconderlos utilizando el abanico disponible de estrategias de comunicación o de negociación para evitar ser culpabilizados (*blame avoidance strategies*) (Wenzelburger, 2011; Bonoli, 2012; en español, Calzada y Del Pino 2013).

¿Cuál de estas teorías encaja con el caso español? Como hemos visto, la crisis golpeó fuertemente a España. Los gobiernos sucesivos aplicaron duras políticas de ajuste con el objetivo de consolidar las cuentas públicas, tal y como la UE y otros organismos internacionales solicitaban a cambio de apoyo. ¿Hasta qué punto los

gobiernos nacionales y autonómicos tuvieron margen para elegir el tipo de políticas de consolidación que quería aplicar?

Existen aún pocos análisis sobre este tema pero el trabajo de Del Pino y Ramos (2018) encuentra que las cinco Comunidades Autónomas estudiadas, incluso las que estaban en mejor situación económica tuvieron que recortar las políticas sociales que son de competencia autonómica. Sin embargo, también es cierto que las Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por partidos de derecha (en ese momento, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha), incluso en una situación económica mejor, recortaron más que las CCAA gobernadas por la izquierda. En otras palabras, la situación económica no lo es todo, los gobiernos tuvieron más margen de maniobra del que predice la literatura sobre consolidación fiscal.

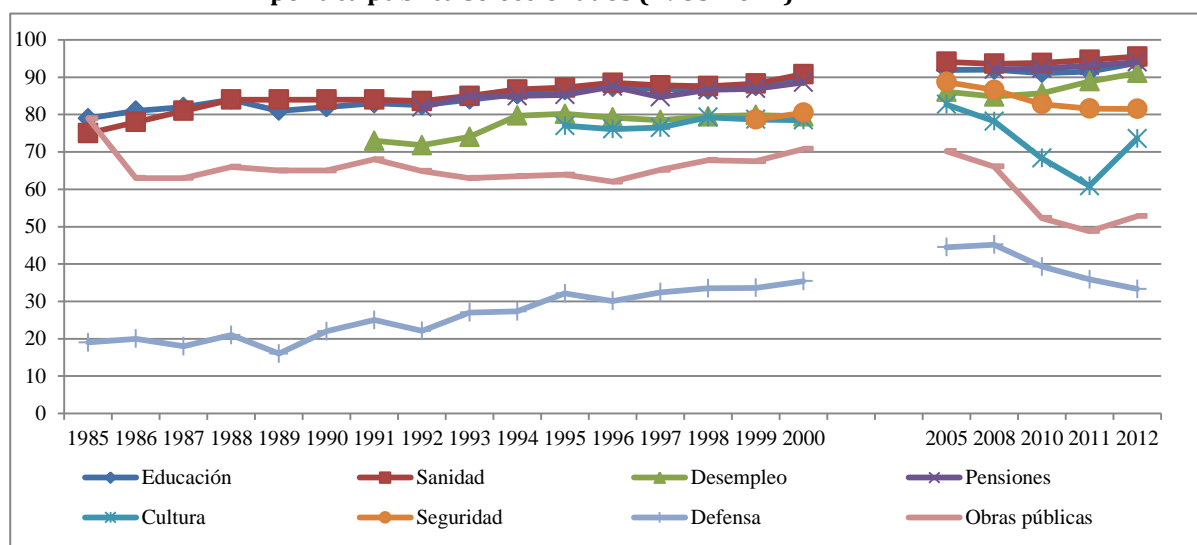
Pero ¿qué hay sobre la opinión pública? ¿Hasta qué punto la opinión pública pudo afectar a las decisiones que adoptaron los gobiernos? Del Pino y Ramos (2018) no estudian con detalle la evolución de la misma durante la crisis como sí haremos aquí. Lo que sí revelan es que los responsables públicos encargados de diseñar los recortes en las CCAA sugieren la idea de que sin la oposición de los ciudadanos y, especialmente, de los profesionales de los servicios públicos, los recortes hubieran ido más allá. En Madrid, donde hubo una intensa movilización ciudadana y de los profesionales de la salud (conocida como “marea blanca” por el color de las batas del personal sanitario), el riesgo electoral derivado de la impopularidad de los recortes contribuyó a que algunas medidas de ajuste no fueran más allá. Igualmente, en Castilla-La Mancha, los responsables públicos reconocían que las protestas de sus ciudadanos, impulsadas en parte por la fuerza de la movilización madrileña, habían contribuido a frenar iniciativas como la privatización de la gestión de algunos hospitales.

En principio parece que los políticos, al menos en algunas CCAA, consideraron que la opinión pública era contraria a los recortes y sabemos que efectivamente antes de la crisis los ciudadanos apoyaban decididamente al Estado de Bienestar pero ¿realmente la opinión pública se mantuvo firme y tan unida como hasta ese momento respecto a su apoyo al Estado de Bienestar o más bien se produjeron fisuras que podrían explicar hasta cierto punto que los políticos se atrevieran a recortar?

3. La evolución de las actitudes hacia el Estado de Bienestar durante la crisis

Desde 1985 a 2008, un 70 y un 85% de los españoles manifestaba su oposición al recorte del gasto en sanidad, pensiones, educación y desempleo. Desde el comienzo de la crisis, la mayoría contraria a los recortes se reforzó hasta llegar en 2012 (último año para el que hay datos sobre esta pregunta) hasta el 95, 94, 94 y 91%, respectivamente (Gráfico 1). Frente a este incremento de contrarios a los recortes en políticas de bienestar, la primera fase de la crisis, hizo que disminuyeran los contrarios al recorte en seguridad, cultura, infraestructuras y defensa, pasando del 87, 78, 66 y 45% respectivamente en 2008 al 82, 61, 48 y 36% en 2011. Solo el inicio de los recortes y/o la victoria de un partido conservador en las elecciones de diciembre de 2011, hicieron que de nuevo la tendencia de incremento de los partidarios del recorte en algunas políticas se frenara: los se oponían al recorte en seguridad se estabilizaron respecto a 2011, se incrementaron los contrarios al recorte en cultura hasta trece puntos, cinco en obras públicas y solo continuaron disminuyendo en defensa.

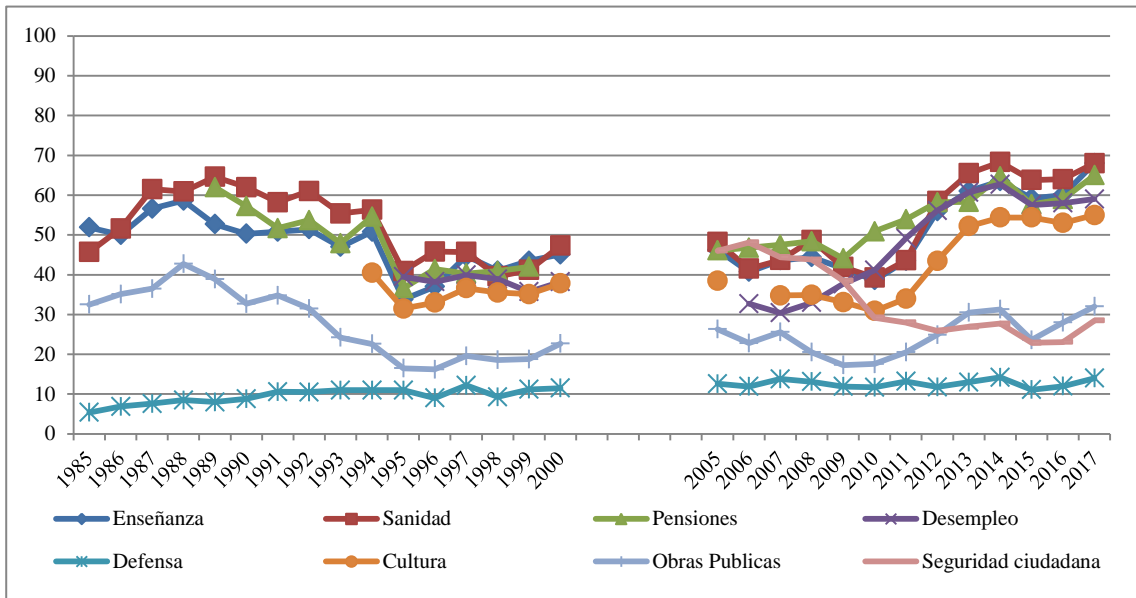
Gráfico 1. Porcentaje de ciudadanos que se opone al recorte del gasto público en sectores de política pública seleccionados (1985-2012)



Fuente: Elaboración propia con datos CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en políticas y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en... (Porcentajes sobre el total de los entrevistados)

Otra forma de analizar la opinión sobre el gasto público, quizá algo más sutil, es pedirles que valoren su cuantía. El CIS pregunta cada año: *“Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones. Dígame si cree que dedican demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios siguientes”*. Desde 1985 y hasta los primeros años de la crisis, entre un 50 y un 60% de la población respondía que los recursos dedicados a sanidad, educación o pensiones eran pocos a pesar de que el gasto no había dejado de crecer en todo el periodo. Este porcentaje decreció hasta el 40% en 2009 y 2010 a la par que aumentaba el de los ciudadanos que pensaba que tales recursos eran los justos. Sin embargo, nuevamente entre 2011 y 2012, el porcentaje de quienes consideraban el gasto en estas políticas escaso comenzó a subir, alcanzando casi el 70% en sanidad, educación y pensiones y cerca del 60% en protección por desempleo. En todo el periodo analizado, nunca más de un 6% ha considerado que los recursos gastados en estas tres políticas fuesen demasiados excepto en protección por desempleo, que ha alcanzado el 10%. Por último, la opinión sobre el gasto dedicado a otras políticas diferentes a las sociales es algo distinta a lo que acabamos de ver. El porcentaje de personas que creía que el gasto en estas políticas era poco descendió alrededor del 30% en cultura y seguridad ciudadana, al 18% en obras públicas y a algo más del 10% en defensa. Sin embargo, solo en cultura y obras públicas, el porcentaje de quienes creen que se gasta poco se ha incrementado con claridad, hasta un 55 y un 31 respectivamente en 2017.

Gráfico 2. Ciudadanos que creen que son “demasiado pocos” los recursos públicos destinados a varios sectores de política pública (1985-2017)

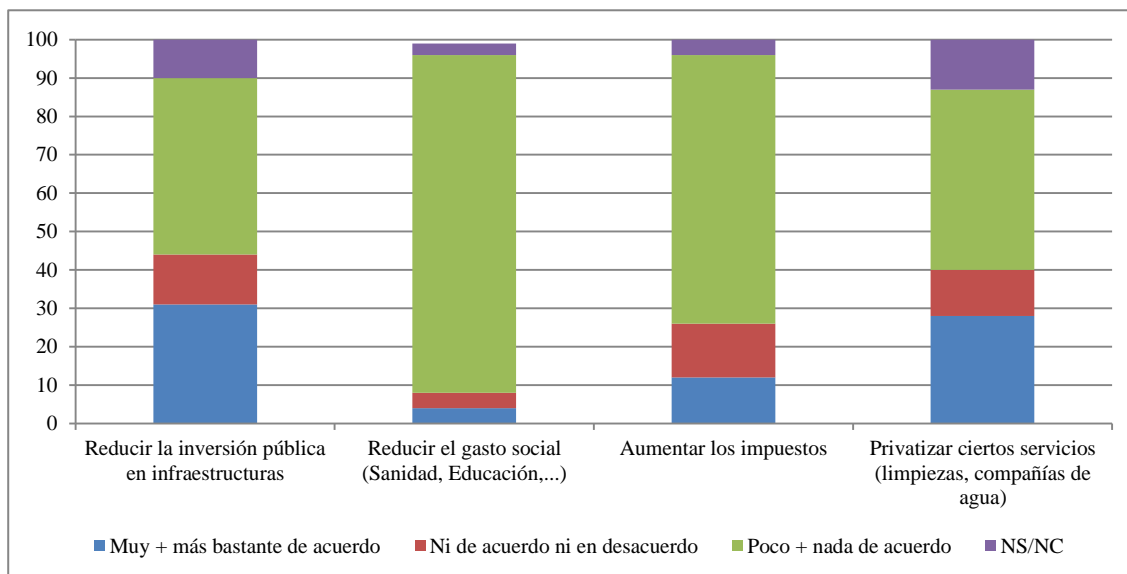


Fuente: Elaboración propia con datos CIS. Pregunta: Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar. (Porcentajes)

Por lo que se refiere a la intervención del Estado en la economía, en 2008, un 80% de los españoles consideraba que “el Gobierno debería tomar medidas para reducir las diferencias de ingresos entre los ciudadanos”. Este porcentaje subió al 84% en 2012 y al 86% en 2014 según la ESS.

Resumiendo lo que hemos visto hasta el momento respecto a la intervención del Estado y en particular al gasto, puede decirse que los ciudadanos piensan que el gasto en políticas sociales es el más relevante y solo durante un par de años un porcentaje mayor que antes de la crisis creyó que los recursos dedicados a este sector eran "los justos" en vez de "demasiado pocos", a diferencia de lo ocurrido con otras políticas respecto a las que las dudas sobre la cuantía del gasto han sido mayores y más prolongadas. El Gráfico 3 (con dato de 2011, no se ha vuelto a hacer esta pregunta por el CIS), corrobora esta idea ya que hay un 88% de los ciudadanos en contra de recortar este gasto para intentar reducir el déficit público.

Gráfico 3. Grado de acuerdo con distintas medidas para reducir el déficit público (2011)

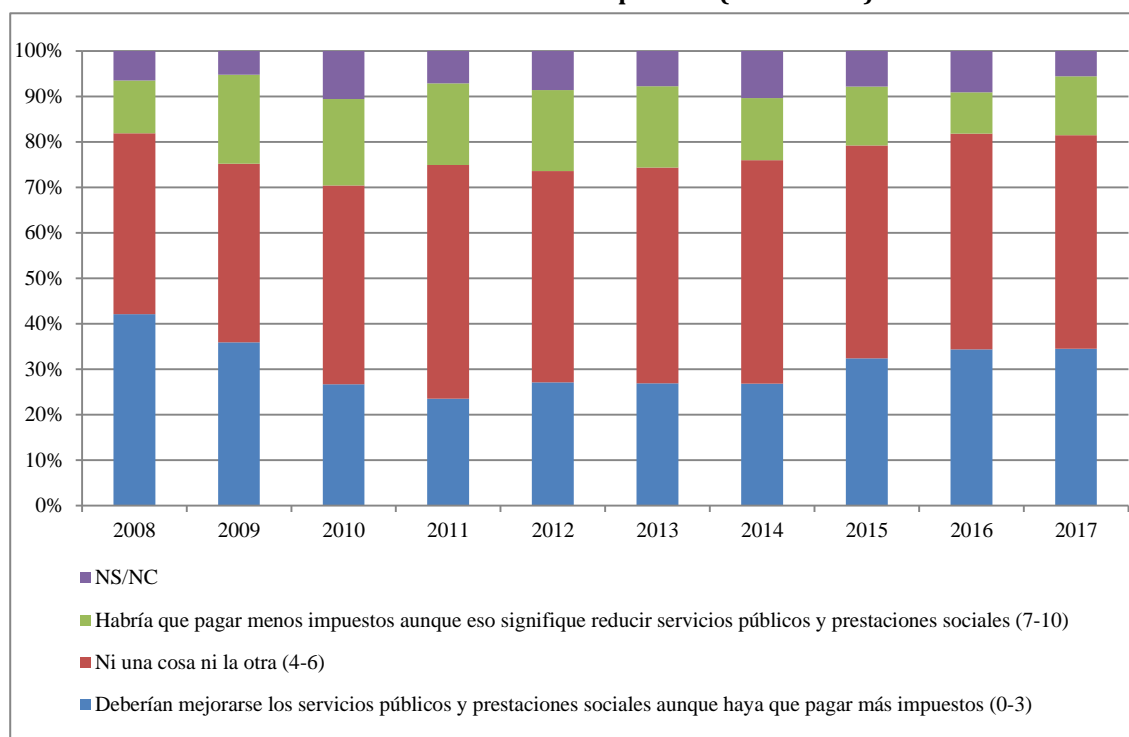


Fuente: elaboración propia con datos CIS. Pregunta: Dígame si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes medidas para reducir el déficit público, es decir, el exceso de gasto sobre los ingresos.

Sin embargo, este gráfico también muestra otros datos interesantes que esta vez tienen que ver con los impuestos. En 2011, un 70% de los ciudadanos se mostraba poco o nada de acuerdo con subir los impuestos y solo un 12% estaría muy o bastante de acuerdo con subirlos.

Quizá uno de los datos más interesantes a reseñar durante la crisis, ha sido lo que podríamos denominar la disminución de la conciencia fiscal, es decir, de la disposición a pagar los impuestos que son necesarios para financiar las políticas del bienestar. El CIS cuenta con una pregunta en la que muestra una escala de respuesta entre 0 y 10, donde 0 es “mejorar los servicios públicos y prestaciones sociales aunque haya que pagar más impuestos” y 10 “pagar menos impuestos aunque eso signifique reducir servicios y prestaciones”. Mientras en 2008, el grupo más a favor de pagar los impuestos sobrepasaba el 42%, en 2011 había descendido al 24%, comenzándose a recuperar desde entonces hasta alcanzar el 34% en 2017. Los ciudadanos que salieron de ese grupo no han ido al grupo más de acuerdo con pagar menos impuestos, ya que estos no han sobrepasado nunca el 20% de la población, pero sí se movieron hacia el grupo que podríamos llamar intermedio, que a lo largo de la crisis ha llegado a aglutinar el 50% de la población.

Gráfico 4. Preferencias sobre los impuestos (2008-2017)



Fuente: elaboración propia con datos CIS. Pregunta. Algunas personas piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales aunque haya que pagar más impuestos (estas personas se situarían en el punto 0 de la escala). Otras piensan que es más importante pagar menos impuestos aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales (éstas estarían en el punto 10) y hay otras que se sitúan en posiciones intermedias. ¿En qué lugar se situaría Ud.?

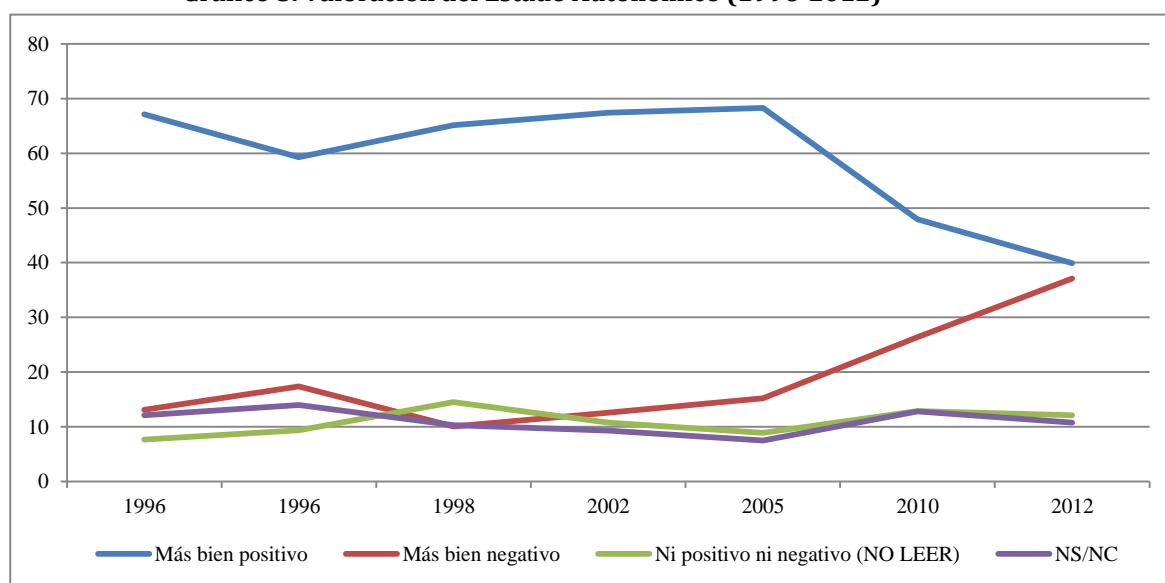
En otro artículo habíamos sugerido que esta mayor prevención de los ciudadanos hacia los impuestos se podría relacionar con la menor disposición de recursos de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones fiscales (Calzada y Del Pino 2013). Pero también guarda relación con el empeoramiento de la imagen del sistema fiscal, de los responsables públicos que tienen que tomar decisiones sobre el Estado de Bienestar y del sistema político en su conjunto que ha sufrido mucho durante la crisis.

El porcentaje de ciudadanos que percibía que pagaba muchos impuestos ha aumentado diez puntos porcentuales, hasta el 69% en 2014, disminuyendo ligeramente después. Además, el porcentaje de españoles que creían que los impuestos no se cobraban con justicia llegó a alcanzar casi el 90%, aumentando alrededor de 20 puntos porcentuales desde 2007. Igualmente, la percepción de fraude fiscal y la injusticia en el cobro de los impuestos ha crecido llamativamente. Mientras que en 2005, solo un 21% de los ciudadanos creía que había mucho fraude y un 27 pensaba que los impuestos se cobraban con justicia (pagan más quienes más tienen), en 2016 estos porcentajes había crecido en más de 30 puntos porcentuales. En estos años también creció el porcentaje de contribuyentes que piensa que se beneficia menos de lo que paga, hasta el 67% en 2013. Aunque en 2016 y 2017 algunos de estos indicadores ha vuelto a descender, todavía no lo han hecho a sus niveles anteriores a la crisis.

La llegada de la crisis puso de manifiesto un deterioro generalizado de la valoración de la confianza en instituciones como los parlamentos y gobiernos nacional o autonómicos que en una escala de 0 a 10 no alcanzan el 5 (CIS). En los años de la crisis, en 2012, porcentajes por encima del 80% de los ciudadanos

culpaban del paro a la (mala) gestión y política económica de los gobiernos central y autonómicos. Los partidos, los sindicatos e incluso la percepción del funcionamiento de la democracia se vieron afectados muy negativamente también. El apoyo al Estado Autonómico (recuérdese que las CCAA son responsables de la sanidad, educación y la atención a las personas en situación de dependencia) que hasta 2010 había sido creciente, cayó en 2012 (no se ha vuelto a realizar esa pregunta por parte del CIS, Gráfico 5) en 30 puntos porcentuales (hasta el 40%) y la principal razón que aducen quienes lo valoran negativamente es que el Estado Autonómico ha aumentado el gasto público (por ejemplo, un 65% de los madrileños, un 58% de los andaluces y un 50% de los catalanes).

Gráfico 5. Valoración del Estado Autonómico (1996-2012)



Fuente: elaboración propia con datos CIS. Pregunta: ¿Cree Ud. que, en general, la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido para España algo más bien positivo o más bien negativo?

Por tanto, por lo que respecta a los impuestos necesarios para sufragar el sistema de protección, los ciudadanos sí se han mostrado más tibios que antes de la crisis y parece que, al menos en parte, ello se ha producido debido a la creciente desconfianza en las instituciones y gestores del sistema en el contexto de tal crisis.

4. Evolución de la actitudes hacia el Estado de Bienestar en distintos colectivos

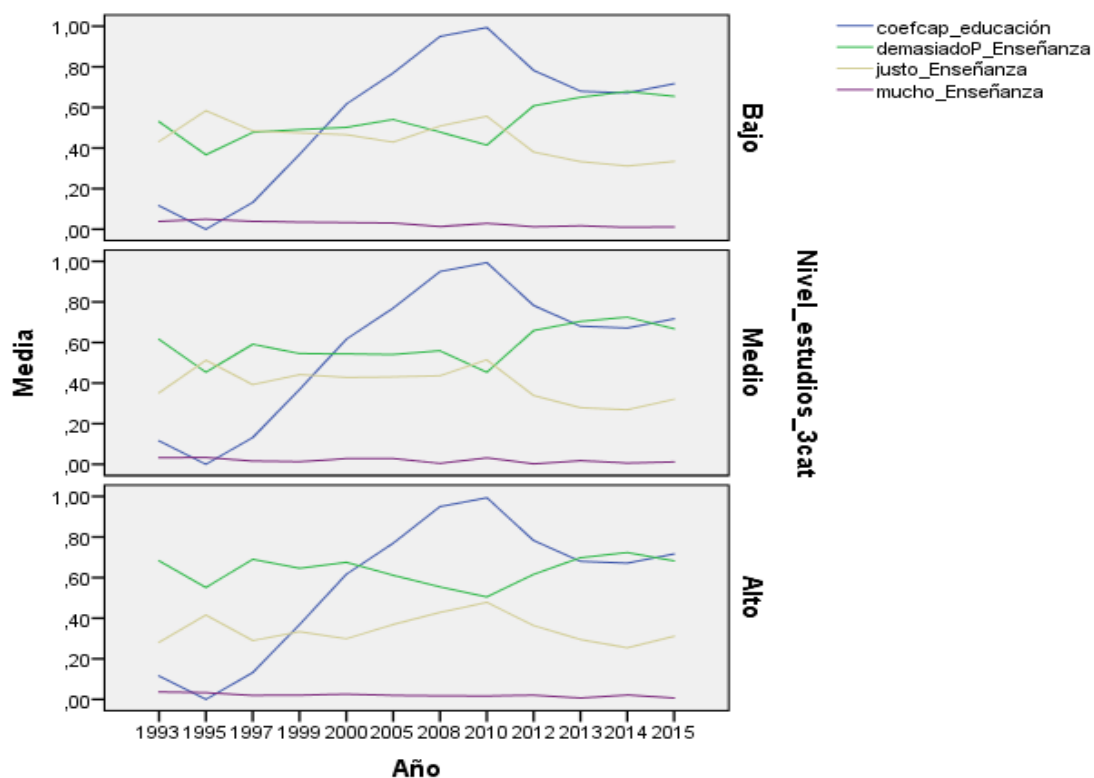
Aunque hemos dicho que la mayoría de la población respalda las políticas sociales, hay razones para pensar que durante la crisis, el apoyo al sistema de bienestar ha podido fracturarse. Ahora vamos a comprobar esta posibilidad centrándonos en las cuestiones que han generado mayor debate público: la posibilidad de que los programas de bienestar pierdan el favor de las clases medias y se queden solo con el apoyo de los más desfavorecidos; el peligro de que se produzca el rechazo al pago de impuestos entre los principales sostenedores de las cuentas públicas (clases medias asalariadas); y la eventualidad de que, en épocas de elevado desempleo y bajada de salarios, un Estado de Bienestar que prioriza las necesidades de los mayores (pensiones) frente a las de familias y jóvenes, acabe generando cierta hostilidad de las generaciones jóvenes.

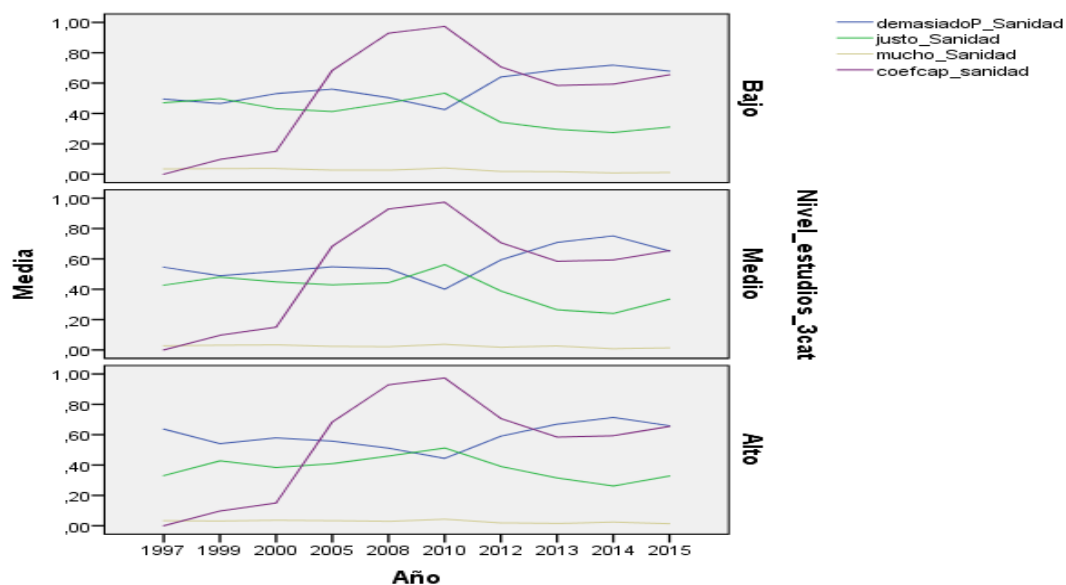
4.1. Polarización entre clases sociales

A lo largo del capítulo ha quedado claro que, en España, la magnitud del colectivo que desea gastar más en el Estado de Bienestar, unido al escaso porcentaje que pide reducciones de gasto, hace difícil hablar de “polarización” de las actitudes: una amplia mayoría quiere gastar más, mientras el resto considera que se gasta “lo justo”.

Pero aunque no podemos hablar de polarización, cabe la posibilidad de que el aumento de apoyo ocurrido durante la crisis se haya debido sobre todo a las actitudes de los menos favorecidos. Quizá estos, más afectados por el desempleo y más necesitados del Estado, hayan reforzado su ya elevado respaldo a la intervención pública. Para valorar si el gasto social ha evolucionado de forma distinta entre unas y otras clases sociales hemos fusionado quince encuestas del CIS realizadas entre 1985 y 2017 en las que se preguntaba a los ciudadanos por su percepción del gasto en distintas políticas públicas. Hemos utilizado el nivel educativo como *proxy* de la posición socio-económica de los individuos. Aunque quizás los ingresos familiares o la ocupación hubieran sido preferibles como indicadores de la clase social de los individuos, en nuestro caso ninguna de las dos variables estaba disponible con una medida homogénea a lo largo de los años. Por otro lado, la alta tasa de no respuesta en las preguntas sobre ingresos y lo problemático de utilizar clasificaciones ocupacionales para medir posición económica en tiempos de crisis y desempleo hacen que, pese a sus muchas limitaciones, el nivel educativo siga siendo utilizado como un aceptable indicador de posición social.

Gráfico 6. valoración del gasto público en sanidad y educación según el nivel de estudios (1996-2012)





El análisis exhaustivo de estas tendencias actitudinales es demasiado extenso como para incluirlo en este capítulo, pero podemos resumirlo diciendo que, en general, las opiniones sobre el gasto público de las personas con estudios bajos, medios y altos se han movido de forma muy similar a lo largo de los años de crisis. En el Gráfico 6 podemos ver la similitud en la evolución de las actitudes entre gente con distinto nivel educativo. En el eje vertical figuran las actitudes hacia el gasto en educación en porcentajes de respuesta. Cada una de las líneas representa el porcentaje de ciudadanos que se acogen a cada una de las opciones de respuesta: el gasto es demasiado poco; el justo o demasiado. En el eje horizontal están los distintos años en los que se hizo esta pregunta. Independientemente de que haya habido cambios en las opiniones sobre la adecuación del gasto público en educación a lo largo del tiempo, lo cierto es que estos cambios se han dado de forma similar en los colectivos con educación baja, media y alta. Hay cambios a lo largo del tiempo, sí, pero no polarización.

Esta evolución paralela se produce con mayor claridad si cabe si miramos cómo han cambiado a lo largo del tiempo las percepciones de los ciudadanos sobre lo que el gobierno se estaba gastando en sanidad. En la parte de abajo del Gráfico 6 mostramos la evolución de las actitudes hacia el gasto sanitario entre los colectivos de educación baja, media y alta, apreciando fácilmente que los cambios en el tiempo se producen de forma refleja en los tres grupos. Aunque solo mostramos el gráfico sobre educación y sanidad, los datos (que no presentamos aquí) para pensiones o desempleo son similares en la ausencia de polarización por nivel educativo.

Esta evolución no diferencial de lo que opinan las personas en función de su nivel educativo es importante porque indica ausencia de fracturas económicas en el apoyo a una de las cuestiones más sensibles a sufrir tales fisuras: el nivel de gasto que el gobierno debe destinar a las partidas sociales. En términos generales, las clases medias no han dejado de apoyar el gasto social o de bienestar en mayor medida que las clases bajas.

4.2. Rechazo fiscal entre los sostenedores del sistema

En contraste con lo ocurrido en las opiniones sobre el gasto, la legitimidad de los impuestos ha sufrido un deterioro claro durante la crisis. Aunque hay indicios

de que la hostilidad hacia el aparato recaudatorio del Estado está volviendo a sus niveles pre-crisis (Gráfico 4), en esta sección analizamos hasta qué punto ha sido una erosión generalizada del apoyo o solo se ha desgastado entre determinados colectivos, quizá los que en mayor medida financian el sistema como las clases medias asalariadas. Por las razones que ya hemos explicado antes, usamos el nivel de estudios de los individuos como *proxy* de su posición social.

Si en 2007, un 18% de los ciudadanos confiaba en la justicia del sistema fiscal, este porcentaje se reduce al 9% en 2017 (Tabla 1). Más preocupante aun es que el desprestigio del funcionamiento de los impuestos ha sido más acusado entre las personas con estudios universitarios que eran antes de la crisis las más confiaban en que los impuestos se cobraban con justicia. Si entre las personas sin estudios o solo con estudios primarios el porcentaje que cree que los impuestos se cobran con justicia ha descendido 8 o 9 puntos entre 2007 y 2017, este descenso ha sido de 14 puntos para quienes tienen estudios universitarios.

Tabla 1. Porcentaje de ciudadanos que cree que los impuestos se cobran con justicia por nivel de estudios (2007-2017)

	2007	2011	2014	2017
Sin estudios	14	10	5	6
Primaria	17	10	5	8
Secundaria*	15	11	5	10
FP	18	10	7	9
Medios Universitarios	19	11		
Superiores Universitarios	25	15	8	11
Total sí	18	11	7	9

Fuente: elaboración propias con datos CIS. Pregunta: ¿Los impuestos se cobran con justicia? Esto es, ¿pagan más los que más tienen? *En 2007 y 2011 la pregunta sobre nivel educativo sólo incluía la categoría “Secundaria”, pero en 2014 y 2017 se distingue entre “Secundaria Primera Etapa” y “Secundaria Segunda Etapa”. Dado que la primera etapa de Secundaria corresponde al nivel obligatorio de la enseñanza, como antes lo hacía la educación Primaria, hemos decidido utilizar el porcentaje de “Secundaria segunda etapa”. **En 2014 y 2017 solo se pregunta por “Estudios universitarios”, en lugar de distinguir entre “Medios universitarios” y “Superiores universitarios”. Esto es así en todas las tablas que siguen.

Aún así, a pesar de que las personas con más estudios desconfían más que antes de la justicia del sistema fiscal (nunca fue muy elevada ni extendida esta creencia, de todos modos), esto no se ha trasladado a un deseo de reducir los impuestos si ello implica una disminución de los servicios y prestaciones. Quienes tienen estudios universitarios eran, han sido durante la crisis y son hoy, los más convencidos de que hacen falta más impuestos y mejores servicios públicos. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa “más impuestos para tener más servicios” y 10 implica pagar “menos impuestos por menos servicios públicos”, los colectivos con estudios más altos muestran una media más cercana de la primera que de la segunda opción. Y son las personas con menos estudios, los que se posicionan, de media, más ambiguamente (cerca del 5) o, en algunos momentos (personas sin estudios en 2014), son más partidarios de bajar impuestos aunque con ello se pierdan servicios.

Tabla 2. Preferencias sobre el pago de impuestos según nivel de estudios (2008-2017)

	Media 2008 (enero)**	Media 2011	Media 2014	Media 2017
Sin estudios	4,6	5,2	5,6	5,3
Primaria	4,3	4,6	5,0	4,7
Secundaria	4,3	3,9	4,3	3,8
FP	3,7	4,0	4,4	4,0
Medios Universitarios	3,3	3,5	-	-
Superiores Universitarios*	3,3	3,5	3,8	3,5
Media total año	4,1	4,2	4,5	4,2

Fuente: elaboración propias con datos CIS. Pregunta: Algunas personas piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos (estas personas se situarían en el punto 0 de la escala). Otras piensan que es más importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales (éstas estarían en el punto 10 de la escala) y hay otras que se sitúan en posiciones intermedias. ¿En que lugar se situaría Ud.? *Sobre cambios en las categorías de la variable nivel educativo, léase el comentario realizado al pie de la Tabla 1.** En 2007 se incluyó esta pregunta con otra escala de respuesta, por lo que hemos tenido que utilizar la encuesta más próxima con una pregunta exactamente igual.

El CIS también pide a los ciudadanos que muestren si están de acuerdo con que "los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, hacer carreteras, etc". En 2017, la mayoría de los ciudadanos de cualquier nivel educativo opina que los impuestos son necesarios y lo hacen en porcentajes bastante similares a los que mostraban antes de la crisis (Tabla 3). Si miramos los datos de 2011 y 2014, es evidente que la crisis tuvo un efecto depresor de la legitimidad del sistema fiscal, pero no hubo grandes diferencias según nivel educativo. Si acaso, el grupo que en mayor medida aumentó su desconfianza hacia los impuestos fue el de las personas sin estudios (11 puntos).

Tabla 3. Porcentaje de ciudadanos de acuerdo con que los impuestos son necesarios por nivel de estudios (2007-2017)

	2007	2011	2014	2017
Sin estudios	48	44	37	54
Primaria	53	48	45	53
Secundaria*	61	60	50	60
FP	49	55	46	48
Medios Universitarios	66	61	-	-
Superiores Universitarios*	69	70	62	64
Total	56	54	48	56

Fuente: elaboración propia con datos CIS. Pregunta: De las siguientes frases que figuran en esta tarjeta que le voy a mostrar, me gustaría que me dijera cuál de ellas refleja mejor su opinión sobre los impuestos. -Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, hacer carreteras, etc. *Sobre el nivel educativo, léase el comentario realizado al pie de la Tabla 1

De lo anterior podemos concluir que la pérdida de confianza en el sistema fiscal que se ha producido durante los años más duros de la crisis no refleja un movimiento de rechazo al pago de impuestos entre las clases medias, al menos de momento. Las personas con estudios superiores han perdido parte de la confianza

en la justicia del sistema fiscal más que otros colectivos, pero son también quienes en mayor medida entienden que los impuestos son necesarios y quienes están más dispuestos a aumentarlos si con ello mejora el Estado del Bienestar. Teniendo en cuenta que hemos tomado el nivel de estudios como indicador aproximado de la carga fiscal que soportan los individuos, no hay razones para pensar que el sistema de bienestar español ha perdido el apoyo de sus principales sostenedores económicos.

4.3. Fracturas entre generaciones

Los españoles acostumbran a situar a los “mayores que viven solos” y a los pensionistas como los colectivos que prioritariamente merecen la ayuda pública, relegando a las necesidades de los jóvenes, clases medias o inmigrantes (Tabla 6)². Pero, curiosamente, es a esos mismos colectivos “poco prioritarios” a quienes se encomienda la salvación del sistema de pensiones públicas, ya que las medidas más apreciadas para promover la sostenibilidad de las pensiones pasan por fomentar la natalidad y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y regularizar el trabajo de los inmigrantes (Tabla 7).

Tabla 6. Opiniones sobre qué colectivo está mejor protegido y cuál debería estarlo (2009)

	% de quienes piensan que ese colectivo tiene poca o ninguna protección	% de quienes piensan que ese colectivo debería estar mejor protegido
Personas mayores que viven solas	77	69
Pensionistas	71	36
Parados	75	49
Jóvenes	77	30
Clases Medias	62	7
Mujeres	68	5
Inmigrantes	34	5

Fuente: elaboración propia con datos CIS. Pregunta correspondiente a la segunda columna: ¿Podría decirme si cree que en la actualidad los grupos que le voy a mencionar reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado? Pregunta correspondiente a la tercera columna: ¿cuál de ellos debería estar mejor protegido por el Estado, en primer y segundo lugar? Los datos son de 2009 excepto para mujeres que son de 2008. Para algunos colectivos (no para jóvenes, ni clases medias) el CIS ha vuelto a preguntar después, en 2015, y los resultados son similares aunque en los últimos años la percepción de desprotección de los mayores y pensionistas se ha incrementado.

² Parte de este epígrafe se basa en un trabajo anterior de las autoras (Calzada y Del Pino 2016).

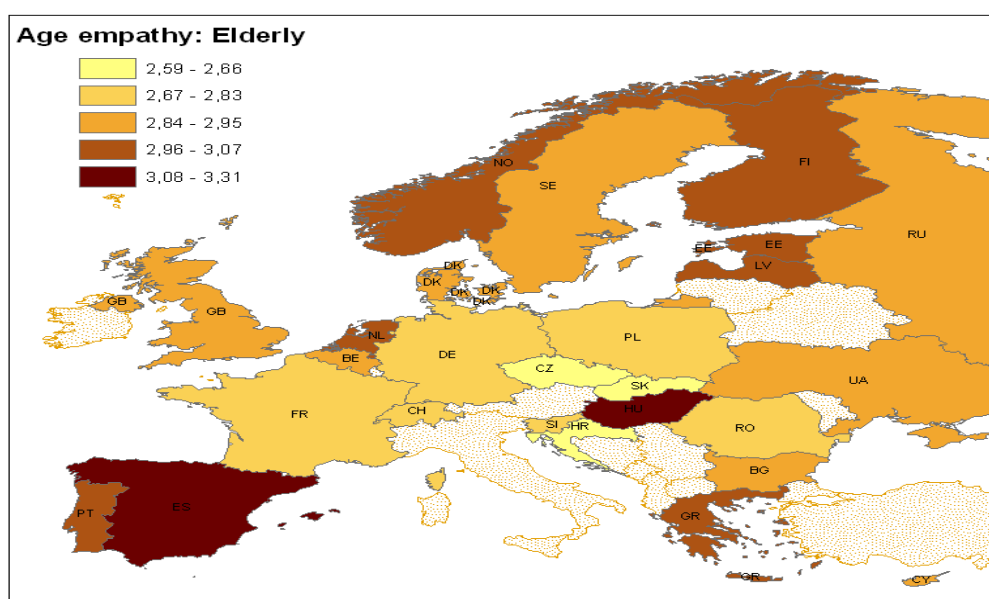
Tabla 7. Valoración de diversas medidas para mantener el sistema de pensiones a largo plazo (2008)

	Retrasar edad de jubilación	Fomentar natalidad	Aumentar años de cotización para cobrar pensión	Fomentar incorporación mujer al mercado de trabajo	Subir cotizaciones a la Seg. Social	Regularizar trabajo inmigrantes para que coticen a la Seg.Social
Muy o Bastante positiva	16	67	17	80	21	81
Ni positiva ni negativa	6	10	8	6	10	4
Negativa o muy negativa	68	13	64	6	56	6

Fuente: CIS. Pregunta: Dígame, por favor, si cree que las siguientes medidas serían muy positivas, bastante positivas, negativas o muy negativas para mantener el sistema de pensiones a largo plazo.

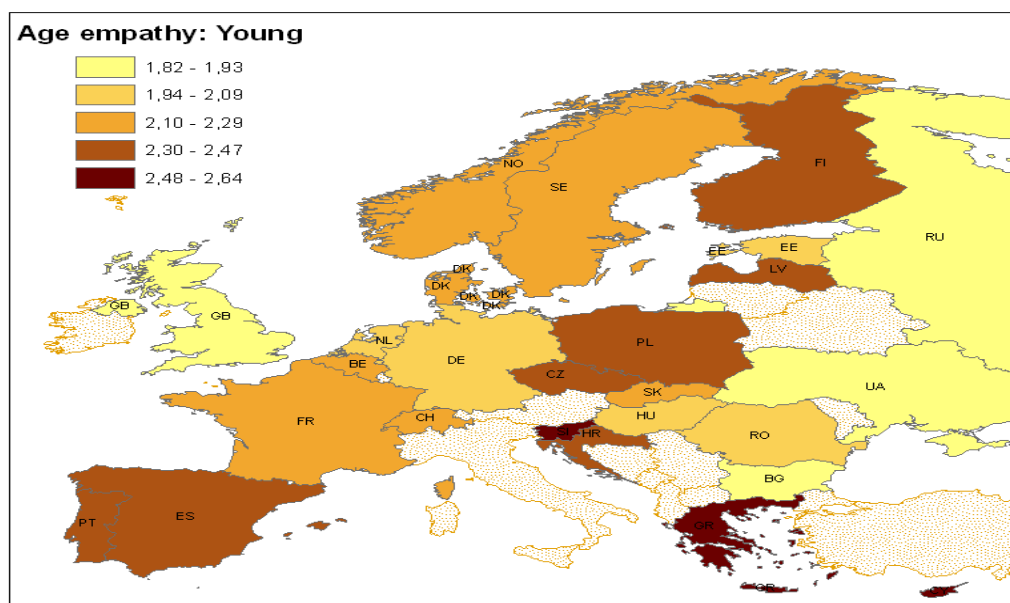
Los gráficos 7 y 8 muestran la distribución en Europa de dos indicadores sobre cómo se percibe en cada país a los jóvenes y a los mayores (datos de la ESS de 2008, único año en el que se incluyó un módulo sobre las actitudes hacia distintos grupos de edad). Se preguntaba a los entrevistados cuál creían ellos que era la opinión mayoritaria del país donde vivían sobre jóvenes y ancianos (“¿En qué medida es probable que la mayoría de la gente en España perciba a los que están en los 20 años como gente amistosa/ competente/ con principios? ...con respeto?; Ahora, piense en las personas de más de 70 años. ¿En qué medida es probable que la mayoría de la gente en España perciba a estas personas ...como gente amistosa/ competente/ con principios? ...con respeto?). En los siguientes gráficos, un tono más oscuro indica una mayor extensión de creencias positivas acerca de los mayores (Gráfico 7) o de los jóvenes (Gráfico 8).

Gráfico 7. Actitudes hacia los mayores en Europa.



Fuente: Elaboración propia con datos de la ESS 2008 y el programa ArcGIS. Las puntuaciones de cada país van de 1 (muy poca gente cree que la mayoría del país tiene una percepción positiva de los mayores) a 4 (muchas gente cree que en su país la mayoría tiene una percepción positiva de los mayores).

Gráfico 7. Actitudes hacia los jóvenes en Europa.



Fuente: Elaboración propia con datos de la ESS 2008 y el programa ArcGIS. Las puntuaciones van de 1 (muy poca gente cree que la mayoría del país tiene una percepción positiva de los jóvenes) a 4 (mucha gente cree que en su país la mayoría tiene una percepción positiva de los jóvenes).

España destaca del resto de Europa en la extensión de valores positivos hacia los mayores (solo equiparada con Hungría). La mayoría piensa que en este país los mayores de 70 años son vistos como gente amistosa, competente y con principios. Existe una actitud general de respeto hacia ellos. No destacamos tanto cuando se trata de las creencias favorables a los jóvenes.

La alta consideración hacia los mayores puede tener efectos sobre las preferencias redistribuidoras y tendría que ser tenida en cuenta antes de realizar cualquier re-orientación del gasto público. Las actitudes hacia las pensiones son un buen ejemplo: pese a la dureza con que la crisis ha afectado a los jóvenes, el apoyo a las pensiones y el deseo de que el Estado gaste más en esta partida sigue siendo elevadísimo.

Con todo, la extensión de estos valores pro-mayores no implica una ausencia de reflexión sobre las necesidades de otros grupos. En el proyecto “Pensions and Education”, tratamos de ver hasta dónde llega la preferencia por ayudar a los mayores mediante este interrogante: “Le preguntaré sobre las cosas que el Gobierno puede hacer para ayudar a la gente. Le voy a presentar una situación complicada. Imagine que el Gobierno debe decidir si en 2014 destina dinero a mejorar la educación o a mejorar las pensiones. ¿Usted qué preferiría?”. También preguntamos: “Si el Gobierno tuviera que elegir entre destinar dinero para crear más guarderías o crear nuevos centros de día para mayores, ¿usted qué preferiría?”. Solo se ofrecían dos opciones de respuesta: gastar más en educación o gastar más en pensiones, para la primera pregunta; construir centros de día para mayores o construir guarderías, para la segunda. De forma espontánea, muchos encuestados dijeron “gastar lo mismo en las dos partidas”, por lo que se codificó como respuesta.

Tabla 7. Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en educación o en pensiones, 2014. Porcentajes.

Destinar el dinero a mejorar la educación	47
Destinar el dinero a mejorar las pensiones	13
Por igual (no leer)	38
Ns/Nc	2

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto "Pensions and Education". Pregunta: "Le preguntaré sobre las cosas que el Gobierno puede hacer para ayudar a la gente. Le voy a presentar una situación complicada. Imagine que el Gobierno debe decidir si en 2014 destina dinero a mejorar la educación o a mejorar las pensiones. ¿Usted que preferiría?".

Pese a la importancia otorgada a las necesidades de los mayores, en 2014 la mayoría preferiría gastar más en educación (47%) que hacerlo en pensiones (13%), aunque una parte importante de los encuestados se negaron a escoger entre ambas y espontáneamente respondieron que debía gastarse en ambas partidas por igual (38%). Los valores etarios favorables a los grupos de más edad y la creencia de que se gasta poco en pensiones no deben por tanto interpretarse como una preferencia ciega por las políticas que favorecen a los mayores. Una cosa es priorizar a un grupo social y otra olvidarse del resto, y en este caso las necesidades educativas de los niños no sólo son tenidas en cuenta sino puestas en primer lugar.

En la Tabla 8 se muestran los resultados de la elección entre guarderías y centros de día para mayores. La balanza se inclina hacia la protección de la tercera edad. El 38% de los encuestados preferían construir más centros de día y solo un 19% escogió las guarderías. Aun así, la respuesta que más apoyos sumó fue la de gastar por igual en ambas cosas (40%).

Tabla 8. Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en centros de día o en guarderías, 2014. Porcentajes.

Destinar el dinero a crear más guarderías	19
Destinar el dinero a crear más centros de día para mayores	38
Por igual (no leer)	40
Ns/Nc	3

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto "Pensions and Education". Pregunta: "Y si el Gobierno tuviera que elegir entre destinar dinero para crear más guarderías, o destinar ese dinero en crear nuevos centros de día para mayores, ¿usted qué preferiría?"

Por grupos de edad, hay poco auto-interés y bastante solidaridad intergeneracional o, lo que es lo mismo, una postura favorable a redistribuir hacia quien se percibe como más necesitado (Tablas 8 y 9). Aunque los jóvenes son especialmente partidarios de que se gaste en educación en lugar de en pensiones, es de destacar que también son los jóvenes quienes en mayor medida apuestan por crear centros de día para mayores en lugar de guarderías. En la pregunta sobre "educación o pensiones" los jóvenes son más partidarios de invertir en educación y a medida que avanza la edad encontramos más partidarios de gastar por igual en ambas partidas. El alto porcentaje de entrevistados que mencionaron espontáneamente su deseo de gastar en ambas partidas, pese a que esta opción no se leía y venía desincentivada por el propio enunciado de la pregunta, indica el escaso conflicto generacional en la distribución de recursos por parte del Estado.

Tabla 9. Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en educación o en pensiones, por grupos de edad, 2014. Porcentajes

	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	64+	Total
Educación	69	57	51	47	38	39	48
Pensiones	6	10	16	14	14	14	13
Por igual (espontánea)	25	33	33	39	48	47	39
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto "Pensions and Education". Pregunta: "Ahora le preguntaré sobre las cosas que el Gobierno puede hacer para ayudar a la gente. Le voy a presentar una situación complicada. Imagine que el Gobierno debe decidir si en 2014 destina dinero a mejorar la educación o a mejorar las pensiones. ¿Usted que preferiría?"

Tabla 10. Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en centros de día o en guarderías, por grupos de edad, 2014. Porcentajes.

	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	64+	Total
Guarderías	32	23	19	16	15	18	19
Centros de día	42	41	47	46	32	28	39
Por igual (espontánea)	26	36	34	37	53	54	42
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto "Pensions and Education". Pregunta: "Y si el Gobierno tuviera que elegir entre destinar dinero para crear más guarderías, o destinar ese dinero en crear nuevos centros de día para mayores, ¿usted qué preferiría?"

En conclusión, por lo que se refiere a las fracturas en la legitimidad del Estado del Bienestar, al menos hasta la fecha, nuestro sistema ha conseguido mantener un consenso social bastante homogéneo. No todo el mundo apoya las políticas sociales por igual, pero no se aprecian grandes fracturas entre clases sociales y, en cualquier caso, las diferencias no se han agrandado durante los años de crisis. Más que las fracturas, nuestro país destaca por lo contrario, por la existencia de solidaridades entre clases y entre generaciones.

5. Conclusiones

La literatura sobre Estado de Bienestar ha considerado tradicionalmente que el amplio apoyo ciudadano a las políticas sociales las hacía inmunes a recortes significativos ya que los políticos no querían arriesgarse electoralmente. Sin embargo, en los últimos años, hemos asistido a un fuerte recorte de tales políticas. Esto nos ha hecho preguntarnos si el recorte se ha producido porque los ciudadanos quizá ya no apoyan el Estado de Bienestar como lo hacían antes y por lo tanto los políticos no temen ser castigados en las urnas; o quizá, a pesar del respaldo ciudadano, simplemente, los políticos tienen que asumir el riesgo electoral de los ajustes porque dada la situación económica y las presiones internacionales no tienen otro remedio que hacerlo.

En España, los recortes del gasto público han sido severos. Recuérdese que si en 2007 el gasto público en porcentaje del PIB era de 45,5% en 2018 será del 40,5%, uno de los más bajos de los países de nuestro entorno. Dentro del gasto público, en particular, el social ha sufrido importantes ajustes. Con todo, las sociales no han sido las políticas más afectadas. Este dato junto con el que el apoyo a las políticas sociales se han mantenido alto y estable a lo largo de la crisis, nos

hace pensar dos cosas. Primero, en crisis, la opinión pública pierde peso como uno de los factores que los decisores públicos tienen en mente cuando tienen que adoptar decisiones de recorte. Segundo, aunque menos, la opinión pública todavía sigue siendo tomada en cuenta ya que las políticas hubiesen sufrido mayores ajustes sin el apoyo ciudadano. A diferencia de lo que ha ocurrido con el gasto social, los ciudadanos han mostrado dudas, en algunos casos temporales y en otros no tanto, sobre el gasto público en general y el papel del Estado en otras áreas de intervención pública. Estas políticas han sido más recortadas que las sociales.

Para acabar queremos realizar dos últimas apreciaciones relacionadas con tres asuntos que están presentes en el debate público español en la primavera de 2018. Por un lado, se debate acerca de reformar el sistema fiscal y quizá incrementar los impuestos para poder sostener el Estado de Bienestar. Lo cierto es que los ciudadanos muestran menos proclividad que antes de la crisis al pago de impuestos, especialmente aquellos con nivel de renta más bajo. Las clases medias están más concienciadas con el pago de impuestos pero entre ellas ha incrementado la percepción de injusticia del sistema.

En segundo lugar, queremos advertir que todavía no contamos con los resultados de la última ronda de la ESS que ha preguntado sobre el grado de aceptación que tendría una renta básica. Sí disponemos de los resultados para otros países. El porcentaje de ciudadanos a favor de esta política pública en el conjunto de países es de solo el 52%. En otras palabras, en la gran mayoría de los países el apoyo a este tipo de políticas dirigidas especialmente a los más desfavorecidos es menor, la opinión pública está más fragmentada, que a las políticas tradicionales del Estado de Bienestar de las que se beneficia toda la ciudadanía y respecto a las que el consenso es muy alto. Seguramente en España ocurrirá lo mismo y quizá aquí sí podrían observarse más fracturas de las que hemos visto en relación con otras políticas sociales.

Por último, otra apreciación se refiere al efervescente debate entre los académicos sobre hasta qué punto es legítimo destinar más recursos públicos, por definición, escasos a los mayores, estando estos en general mejor protegidos que otros grupos de edad. Algunos han planteado este debate en términos de "conflicto" intergeneracional". Por el momento, la información que tenemos no indica que los ciudadanos perciban un conflicto en estos términos aunque debe advertirse que los datos son anteriores a las recientes reivindicaciones de los pensionistas.

Bibliografía

- Bonoli, G. (2012) 'Blame Avoidance and Credit-claiming Revisited', en G. Bonoli y D. Natali, *The Politics of The New Welfare State*. Oxford University Press. 93-110.
- Brooks C. y Manza, J. (2013) 'A Broken Public? Responses to the Great Recession?', *American Sociological Review* 78:5, 727-748.
- Clarke, HD., Borges, W., Stewart, MC., Sanders, D. y Whiteley, P. (2013) 'The Politics of Austerity: Modeling British Attitudes Towards Public Spending Cuts', en N. Schofield, G. Caballero, D. Kselman (eds.) *Advances in Political Economy: Institutions, Modeling and Empirical Analysis*, Chapter: The Politics of Austerity: Modeling British Attitudes Towards Public Spending Cuts, Publisher: Springer. 265-287.
- Calzada, I. y Del Pino, E. (2013) "La imaginación da el poder: estrategias políticas para evitar el castigo electoral y reformar el Estado de Bienestar", en E. del Pino y M^a J,

- Rubio (eds.) *Los Estados de Bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva comparada*. Madrid. Tecnos. 147-66.
- Calzada, I. y Del Pino, E. 2016. "Actitudes hacia la redistribución, ¿cómo ha afectado la crisis?", *Revista Española del Tercer Sector*, 33, 65-90.
- Del Pino, E. y Calzada, I. (2015): Preferencias sobre el Estado del Bienestar y satisfacción con las políticas sociales en el estado autonómico (1985-2013), CIS: *Situación Social en España 2015*. Centro de Investigaciones Sociológicas: Madrid. 1881-92.
- Del Pino, E. y Ramos, JA. (2018) Is Welfare Retrenchment Inevitable? Scope and Drivers of Healthcare Reforms in Five Spanish Regions During the Crisis. *Journal of Social Policy* 34, 1-20.
- Dellepiane, S. y Hardiman, N. (2012) "Fiscal Politics in Time: Pathways to Fiscal Consolidation (2000-2012)", UCD Geary Institute, Discussion Paper WP2012/07.
- ESS (Encuesta Social Europea) varias olas <http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/spain/>
- Ervasti, H., Goul-Andersen, J., y Hjerm, M. (2013) 'Economic Downturns and Public Support for the Welfare State', Council for European Studies Conference, Columbia University, Junio.
- FEDEA (2016) Sanidad, Educación y Protección Social: Recortes Durante la Crisis Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA. Estudios sobre la Economía Española, 2016/17.
- Giger, N. (2010) 'Do voters punish the government for the welfare state retrenchment? A comparative study of electoral cost associated with social policy?' *Comparative European Politics* 8:4, 415-443.
- Guillén, A.M. y León, M. (2011) eds. *The Spanish Welfare State in European Context*. Farnham: Ashgate.
- Heald, D. y Hood, C. (2014), *The politics of the Fiscal Squeeze. Putting the Politics of Fiscal Squeeze into Perspective*, Proceedings of the British Academy, 197, 3-25.
- Pierson, P. (2001) *The New Politics of the Welfare*. New York: Oxford University Press.
- Rodríguez-Cabrero, G. (2011). 'The Consolidation of the Spanish Welfare State (1975-2010).' In AM. Guillén y M. León, eds., *The Spanish Welfare State in European Context*. Farnham: Ashgate, 17-38.
- Soroka, SN. y Weakliem, DL. (2010) *Degrees of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor-Gooby, P. (2011) 'Security, equality and opportunity: attitudes and the sustainability of social protection', *Journal of European Social Policy* 21:2, 150-63.
- Vis, B. (2016) 'Taking Stock of the Comparative Literature on the Role of Blame Avoidance Strategies in Social Policy Reform', *Journal of Comparative Policy Analysis*, 18, 2, 122-37
- Wagschal, U. y Wenzelburger, G. (2012) When do Governments Consolidate? A Quantitative Comparative Analysis of 23 OECD Countries (1980-2005), *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 14:1, 45-71.
- Wenzelburger, G. (2011) 'Political Strategies and Fiscal Retrenchment: Evidence from Four Countries', *West European Politics* 34:6, 1151-84.
- Wenzelburger, G. (2014) 'Blame avoidance, electoral punishment and the perceptions of risk', *Journal of European Social Policy* 24:1, 80-91.